

El literato don Manuel Azana, el crítico que escribió la interpretación realista de Don Quijote, el ex-Presidente del Ateneo quiere demostrar en todos sus actos que la República no necesita de la violencia ni del crimen para defender—empleo sus propias palabras—la cultura y la democracia contra las fuerzas tenebrosas del pasado.

Fusilamiento de los generales Goded y Fanjul

El 12 de agosto de 1936 llega un telegrama de Barcelona. Se le da publicidad sin comentarios, sin grandes títulos, sin fotografías espeluznantes. Cuatro líneas que dicen: «A las seis y media de la mañana se ha cumplido la sentencia dictada por el Consejo de Guerra sumarísimo, que juzgó a los exgenerales Goded y Burriel».

Seis días después aparece en los periódicos esta otra noticia: «La Sala Sexta del Tribunal Supremo, constituida en Consejo de Guerra para juzgar al exgeneral Fanjul y al excoronel Fernández Quintana, ha sentenciado de acuerdo con la petición fiscal. La condena inevitable ha sido cumplida esta mañana, a las cinco, en la Cárcel Modelo».

El fusilamiento de estos altos jefes militares, después de haber sido juzgados de acuerdo con la ley, indica palmariamente que el Gobierno de Madrid no procede como lo están haciendo los fascistas, quienes continúan ejecutando en masa en aquellas regiones que han invadido. Cuando se conocen los detalles de los miles de inocentes sacrificados, juzgará el mundo hasta dónde arrastran y bestializan la ambición, la codicia y el odio de hombres que confiesan haber nacido sólo para guerrear, es decir, para matar.

Sin embargo, no obstante los hechos, no obstante el terror que siembran los militares y los sarracenos, se publican en la prensa capitalista del exterior informaciones truculentas sobre la «crueldad» del régimen republicano, integrado por «hordas de comunistas y de fieras humanas que se despachan por igual con nacionales y extranjeros». A estas acusaciones contesta don José Giral, Presidente del Consejo de Ministros, dirigiéndose a los corresponsales de distintos países:

«Una de las cosas más torpes que los sublevados y sus cómplices de afuera vienen diciendo, es que se ha constituido un Gobierno rojo en Madrid. En el Gobierno, como ustedes saben, no hay ministros socialistas ni comunistas, a pesar de que son las fuerzas obreras las que están salvando a España de la barbarie. Ni hemos formado un Gobierno rojo, ni se trata de establecer una dictadura de izquierda. Tratamos simplemente de salvar las conquistas democráticas del pueblo que da su sangre por ellas.

»Respecto de las garantías y de las consideraciones que tienen aquí los extranjeros, se incurriría en un grave pecado de ingratitud si no se reconociese que el Gobierno español, en los momentos más críticos de esta rebelión, y cuando se están sacrificando miles de vidas, no sólo protege, como es su deber, la seguridad personal y los bienes de todos los extranjeros, sino que ha demostrado de modo patente que ello constituye un motivo principal de preocupación para nosotros. Y no digo más porque creo que en esto no hay máximum de deber, sino un deber normal para todo Gobierno de país civilizado».

Manifiesto del Partido Comunista

El 18 de agosto lanza un manifiesto el Partido Comunista español, en el que se enjuicia con merecida severidad la sublevación antidemocrática de los militares y se ensalza el heroico comportamiento del pueblo. «Queremos evitar a nuestro país el peligro de nuevas militaradas—dicen los comunistas—. Queremos vivir en paz con todos los pueblos del mundo. Defendemos las más puras esencias de la democracia. Luchamos porque los obreros tengan un salario remunerador, y porque no vuelvan a ser azotados por el espectro del paro y del hambre. Luchamos por una legislación justa y por la igualdad

de derechos políticos y sociales del hombre y de la mujer. Luchamos porque los campesinos tengan tierra suficiente para poder vivir. El bienestar para todos es lo que deseamos. Y nosotros sabemos que esto es posible dentro de nuestra República democrática. Por eso la defendemos, como defendemos las libertades a que tienen derecho Cataluña, Euzkadi, Galicia y Marruecos. Respetamos las ideas religiosas, tanto como deseamos que sean respetadas las nuestras. Pero combatimos a los mercaderes de la religión, a todos aquellos que de los conventos y de las iglesias han hecho centros de conspiración y de espionaje, transformándolos en fortalezas dirigidas contra el pueblo».

Pocas semanas antes, el 15 de julio de 1936, había declarado el líder comunista de Francia, Mauricio Thorez: «Todo lo que queremos es un poco más de bienestar para la clase trabajadora dentro del régimen actual. Somos enemigos de la gran propiedad capitalista, pero no de los pequeños propietarios, quienes deben protegerse con mayores facilidades de crédito para aliviar su situación. Estamos de acuerdo con los socialistas en que hay que hacer algo en favor de estas pequeñas empresas y en favor también de la clase media. Debo repetirlo: un poco más de bienestar para los trabajadores, dándole a la democracia sentido económico».

La situación es clara. Únicamente la testarudez, la pasión o la mala fe pueden proclamar, en el caso concreto de España, que allí la República se está comunizando. Lo que podría decirse, lo que debe afirmarse es que el comunismo se republicaniza y comprende que cumple con su deber, que cumple con sus postulados de mejoramiento colectivo, apoyando decididamente a la democracia contra la dictadura de las minorías privilegiadas.

Sólo puede dominarse a la reacción debilitándola económicamente

¿Pero cómo acabar con la dictadura de las minorías privilegiadas? ¿Cómo disminuir su poder incontrastable, si poseen las tres cuartas partes de la riqueza del país? El instinto popular no se equivoca. ¡A los grandes terratenientes, a los banqueros que son amos y señores de las finanzas, a los aristócratas y a los dignatarios de la iglesia que atesoran millones, hay que vencerlos en el frente económico pues su aplastamiento en los campos de batalla sólo sería a medias!

Es indispensable también, y así lo dicen los periódicos, depurar el servicio diplomático, depurar el magisterio, depurar las oficinas públicas en donde siguen todavía, taimadamente guarecidos, miles de funcionarios monárquicos y fascistas que en cualquier momento traicionarán a la República.

El Gobierno no puede oponerse al clamor de los combatientes, cuando hasta el exconde de Romanones ha escrito en periódicos franceses: «A los sublevados contra el pueblo español, en las mayores condiciones de iniquidad, es necesario aplicarles íntegramente el código de justicia militar. Y quienes les apoyan y financian deben purgar también el grave delito que han cometido contra la patria».

En el Ministerio de Instrucción Pública empiezan a higienizarse sus departamentos, sobre todo en la sección universitaria. En Relaciones Exteriores quedan cesados varios centenares de diplomáticos, quienes estaban soñando con la reinstalación de los Borbones en el poder. Se dan las gracias por sus servicios—¡y se les jubila!—a numerosos jueces y magistrados que siempre fallaron en perjuicio de los desposeídos.

En lo económico, a reserva de dar cuenta en su día a las Cortes, se dispone la rebaja del cincuenta por ciento en alquileres mensuales inferiores a 201 pesetas, y se concede una moratoria para satisfacer los atrasados; se decreta intervenir las explotaciones mineras y establecer una ordenación de la energía eléctrica; y el Consejo de Ministros, después de mucho meditarlo, acuerda incautarse de la Compañía Trasatlántica, como ya se había hecho con la Transmediterránea, perteneciente al contrabandista Juan March, financiador principal de los generales insurrectos.